

Plaza pública

para la edición del 11 de diciembre de 1995

Cambios

Miguel Ángel Granados Chapa

No se ha practicado aún la mudanza de miembros del gabinete que muchas personas suponen necesaria para mejorar el desempeño gubernamental. Pero el viernes pasado se produjeron dos relevos en agencias federales de importancia, que además de su relieve administrativo tienen trascendencia política por la biografía de los personajes involucrados.

El procurador agrario Dante Delgado fue sustituido por su paisano, el diputado Dionisio Pérez Jácome. Y el director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INFA), Javier López Moreno, dejó su lugar a José Antonio Carranza Palacios. Los dos funcionarios que dejaron de serlo fueron gobernadores interinos en sus respectivas entidades, y forman o formaron parte de equipos políticos significativos.

Delgado Rannauro reemplazó al gobernador Fernando Gutiérrez Barrios en Jalapa, cuando el primero de diciembre de 1988 el ahora atacado por Carlos Salinas lo nombró secretario de Gobernación. Seis años después de esa fecha, y habiendo sido luego de su interinato embajador en Roma y secretario de organización del PRI, Delgado Rannauro sustituyó a Arturo Warman como procurador agrario. Luego, en febrero de este año, recibió una encomienda adicional, la

de coordinar a las dependencias federales en Chiapas, tarea que llevaba el nombre de coordinación del programa de bienestar social y desarrollo económico sustentable. En términos llanos, por la naturaleza de sus funciones y por su vocación política, el ex gobernador de Veracruz se convirtió en uno, quizá el más poderoso, de los cuatro gobernadores que llegaron a coexistir en Chiapas. Los tres restantes eran el constitucional, Eduardo Robledo, que tomó posesión hace un año y que dentro de un mes exactamente puede volver a su responsabilidad, cuando se agote la licencia que solicitó merced a la ingobernabilidad que le suscitó la índole de su elección. El interino, Julio César Ruiz Ferro, que reemplazó a Robledo, era y es en realidad el más tenue de los gobernadores, aun superado en presencia por el periodista Amado Avendaño, que durante los primeros meses de este año se condujo como gobernador en rebeldía, forma simbólica de protestar por las irregularidades de la contienda electoral en que participó con la bandera del PRD.

El poder de la bolsa, es decir los recursos federales que aunque fuera con avaricia no dejaron de fluir hacia Chiapas, dio a Delgado Rannauro un papel protagónico que lastimó diversos intereses locales, sobre todo por su ejercicio sobrador y autosuficiente, desdeñoso de las formas. Aunque Delgado Rannauro ha distado de ser un político dependiente de Gutiérrez Barrios, su remoción del viernes pasado parece asociada con la suerte política, en declinación, del ex secretario de Gobernación,

señalado por su antiguo jefe, el ex presidente Salinas, como conspirador en contra suya.

Hay que decir, sin embargo, que el sustituto de Delgado Rannauro en la procuraduría agraria, el diputado Dioniso Pérez Jácome, ha trabajado también de cerca con Gutiérrez Barrios. Fue subsecretario de Gobernación precisamente, y aparte una larga carrera administrativa (transcurrida en buena medida al lado de Jorge de la Vega, de quien fue también subsecretario, en Comercio), ha sido diputado en dos legislaturas. En la actual, en que acaba de pedir licencia, desempeñó un sobresaliente papel, como presidente de la comisión de gobernación y puntos constitucionales, en cuyo carácter impulsó la declaratoria de Presidente electo en favor del doctor Ernesto Zedillo.

Pérez Jácome sólo será procurador, pues las tareas de supergobernador de Chiapas que correspondieron a su antecesor, habían cesado días antes, como anuncio de su remoción formal. Precisamente la víspera de que se le aceptara su renuncia había devuelto sus atribuciones a los secretarios de la reforma agraria y desarrollo social, así como a Gobernación, que responsabilizó de su propio ejercicio al subsecretario Arturo Núñez. Tal decisión específica y en apariencia sólo de carácter administrativo, corresponde a la estrategia política de privar a Chiapas de su condición de entidad sujeta a tratamiento excepcional, como si diciendo que se restaura la normalidad ésta volviera en efecto.

El ex gobernador de Chiapas Javier López Moreno concluyó su tarea de poco menos de un año como

director general del INEA. También fue breve, pero fructífero, el interinato que cubrió durante casi todo 1994 en su entidad natal, al socaire de la insurrección zapatista, que obligó a sustituir al gobernador Elmar Setzer, que también como interino había sustituido a J. Patrocinio González Blanco Garrido, que sólo se sostuvo un año como secretario de Gobernación.

López Moreno, que contribuyó con eficacia al mantenimiento de la tregua pactada por el zapatismo y el gobierno federal, padeció en Chiapas la dualidad del presidente Salinas. Por un lado, el Ejecutivo federal estaba obligado a dar señales activas de su declarada voluntad pacificadora, pero al mismo tiempo aceptaba de mal modo las acciones que en esa dirección pero con sentido social concreto emprendía el gobernador. En medio de las vicisitudes propias de su delicado encargo, éste recibió en Tuxtla Gutiérrez la noticia del asesinato de su amigo Luis Donaldo Colosio, con quien mantenía vínculos políticos y personales estrechos. Eso no obstante, López Moreno se ha abstenido de lucrar con eso que algunos llaman la herencia colosista, y aceptó dirigir una institución de bajo perfil político aunque de gran trascendencia social, pues unos seis millones de personas mayores de quince años padecen todavía analfabetismo pleno, y requieren por lo tanto el auxilio de una institución estatal que remedie su carencia.

José Antonio Carranza Palacios, que ahora dirigirá el INEA, forma parte del patrimonio de la Secretaría de Educación Pública. Cumplirá bien su papel, por eso.

PLAZA PÚBLICA

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Cambios

Dos ex gobernadores interinos, uno de Veracruz y otro de Chiapas, fueron protagonistas de relevos administrativos que aparte su relevancia intrínseca también conciernen a los grupos de que fueron son parte.

NO SE HA PRACTICADO AÚN LA MUDANZA DE miembros del gabinete que muchas personas suponen necesaria para mejorar el desempeño gubernamental. Pero el viernes pasado se produjeron dos relevos en agencias federales de importancia, que además de su relieve administrativo tienen trascendencia política por la biografía de los personajes involucrados.

El procurador agrario Dante Delgado Rannauro fue sustituido por su paisano, el diputado Dionisio Pérez Jácome. Y el director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Javier López Moreno, cedió su lugar a José Antonio Carranza Palacios. Los dos funcionarios que dejaron de serlo fueron gobernadores interinos en sus respectivas entidades, y forman o formaron parte de equipos políticos significativos.

Delgado Rannauro reemplazó al gobernador Fernando Gutiérrez Barrios en Jalapa, el primero de diciembre de 1988 cuando el político veracruzano ahora atacado por Carlos Salinas fue nombrado por éste, secretario de Gobernación. Seis años después de esa fecha, y habiendo sido luego de su interinato embajador en Roma y secretario de organización del PRI, Delgado Rannauro sustituyó a Arturo Warman como procurador agrario. Luego, en febrero de este año, recibió una encomienda adicional, la de coordinar a las dependencias federales en Chiapas, en la renovación del intento de abordar conjuntamente un programa llamado "de bienestar social y desarrollo económico sustentable". En términos llanos, por la naturaleza de sus funciones y por su vocación política, el ex gobernador de Veracruz se convirtió en uno, quizá el más poderoso, de los cuatro gobernadores que llegaron a coexistir en Chiapas. Los tres restantes eran: el constitucional, Eduardo Robledo, que tomó posesión hace un año y que dentro de un mes exactamente puede volver a su responsabilidad, cuando se agote la licencia que solicitó merced a la ingobernabilidad que le suscitó la índole de su elección. El interino, Julio César Ruiz Ferro, que reemplazó a Robledo, era y es en realidad el más tenue de los gobernadores, aun superado en presencia por el periodista Amado Avendaño, que durante los primeros meses de este año se

condujo como gobernador en rebeldía, forma simbólica de protestar por las irregularidades de la contienda electoral en que participó con la bandera del PRD.

El poder de la bolsa, es decir los recursos federales que aunque fuera con avaricia no dejaron de fluir hacia Chiapas, dio a Delgado Rannauro un papel protagónico que lastimó diversos intereses locales, sobre todo por su ejercicio sobrador y autosuficiente, desdeñoso de las formas. Aunque Delgado Rannauro ha distado de ser un político dependiente de Gutiérrez Barrios, su remoción del viernes pasado parece asociada con la suerte política, en declinación, del ex secretario de Gobernación, señalado por su antiguo jefe, el ex presidente Salinas, como conspirador en contra suya.

Hay que decir, sin embargo, que el sustituto de Delgado Rannauro en la procuraduría agraria, el diputado Dionisio Pérez Jácome, ha trabajado también de cerca con Gutiérrez Barrios. Fue subsecretario de Gobernación precisamente, y aparte una larga carrera administrativa (transcurrida en buena medida al lado de Jorge de la Vega, de quien fue también subsecretario, en Comercio), ha sido diputado en dos legislaturas. En la actual, en que acaba de pedir licencia, desempeñó un sobresaliente papel, como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en cuyo carácter impulsó la declaratoria de Presidente electo en favor del doctor Ernesto Zedillo. Antes y ahora, el rasgo característico

El ya ex director del INEA, Javier López Moreno, se desempeñó casi durante un año como gobernador interino de Chiapas, precisamente después de establecida la tregua con el zapatismo armado, cuando se necesitaba la decisión de mantenerla a toda costa.

de su desempeño parlamentario fue su rudeza en el trato con la oposición.

Pérez Jácome sólo será procurador, pues las tareas de supergobernador de Chiapas que correspondieron a su antecesor, habían cesado días antes, como anuncio de su remoción formal. Precisamente la víspera de que se le aceptara su renuncia había devuelto sus atribuciones a los secretarios de la Reforma Agraria y Desarrollo Social, así como a Gobernación, que responsabilizó de su propio ejercicio en Chiapas al subsecretario Arturo Núñez. Tal decisión específica y en apariencia sólo de carácter administrativo, corresponde a la estrategia política de privar a ese estado de su condición de entidad sujeta a tratamiento excepcional, como si diciendo que se restaura la normalidad ésta volviera en efecto.

El ex gobernador de Chiapas Javier López Moreno concluyó su tarea de poco menos de un año como director general del INEA. También fue breve, pero fructífero, el interinato que cubrió durante casi todo 1994 en su entidad natal, luego de que la insurrección zapatista obligó a sustituir al gobernador Elmar Setzer, quien también como interino había sustituido a J. Patrocinio González Blanco Garrido, que sólo se sostuvo un año como secretario de Gobernación.

López Moreno, que contribuyó con eficacia al mantenimiento de la tregua pactada por el zapatismo y el gobierno federal, padeció en Chiapas la dualidad del presidente Salinas. Por un lado, el Ejecutivo federal estaba obligado a dar señales activas de su declarada voluntad pacificadora, pero al mismo tiempo aceptaba de mal modo las acciones que en esa dirección pero con sentido social concreto emprendía el gobernador, y hasta sugirió que López Moreno se había colocado al socaire del zapatismo (es decir, que eludía enfrentarlo, cuando que lo propio era justamente evitar el ahondamiento del conflicto).

En medio de las vicisitudes propias de su delicado encargo, López Moreno recibió en Tuxtla Gutiérrez la noticia del asesinato de su amigo Luis Donald Colosio, con quien mantenía vínculos políticos y personales estrechos. Eso no obstante, López Moreno se ha abstenido de lucrar con eso que algunos llaman la herencia colosista, y aceptó dirigir una institución de bajo perfil político aunque de gran trascendencia social, pues unos seis millones de personas mayores de quince años padecen todavía analfabetismo pleno, y requieren por lo tanto el auxilio de una institución estatal que remedie su carencia.

José Antonio Carranza Palacios, que ahora dirigirá el INEA, forma parte del patrimonio de la Secretaría de Educación Pública. Cumplirá bien su papel, por eso y por sus prendas personales.